

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por D. Francisco A. Mendivil, contra una providencia del Ministerio de Hacienda que viola la garantía que asegura la propiedad.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo se ha seguido por el C. Francisco A. Mendivil á su nombre y el de su hermano como coheredero de la Señora su madre D<sup>a</sup> María Antonia de los Ríos de las Piedras de Mendivil, contra la providencia del C. Ministro de hacienda que no revocaba la de 11 de Mayo de 1860 que adjudicó la casa núm. 650 de la plaza de Veracruz á D. José Lelong, siendo la finca de la propiedad de los quejosos.

Dos cuestiones surgen en el presente juicio; una ¿qué derecho tienen los reclamantes á la finca? y otra, si estos pueden resolverse por vía de amparo. La primera, aunque bastante debatida en el expediente, está imbibida en la segunda, y no puede decidirse sino preocupando las soluciones que son del resorte judicial. La segunda, es la que debe resolver el Juzgado, y está concretada á este punto: ¿Dictar una providencia administrativa diez años antes de reclamarse y considerado ese acto como ejecutoriado, por no haber sido reclamada en tiempo oportuno, procede el amparo como si se tratara de acto de presente? Es evidente que nó, por que el amparo tiene por fin reparar efectos de actos inmediatos y de presente; pues es un recurso violento y perentorio, y aquí se trata de actos pasados que pudieran considerarse hasta proscritos. En el caso actual, tocar cualquier punto, es afectar la cuestion principal, la que está fuera del amparo y envuelve otras de diversa naturaleza; por ejemplo, entre ellas surge la de si el Gobierno ó Lelong ha adquirido la posesion, por el tiempo trascurrido, y hoy so-

lo cabe el juicio de propiedad: lo de si tiene lugar la aplicacion de las leyes de 4 de Marzo y sus concordantes, y otras. Si el Juzgado cree que debe entrar al exámen de lo principal, el expediente ministra copiosos datos, y nada queda que agregar á los informes de las diversas secciones del Ministerio de hacienda, que los han emitido. El no haber tenido tiempo para extender un alegato mas difuso, me hace presentar estos apuntamientos, que emplearé si fuese necesario, concluyendo con pedir al Juzgado resuelva en definitiva, que la providencia del C. Ministro de hacienda, reclamada, no es materia de amparo, y que quedan al C. Mendivil y sus representados á salvo los derechos que tuvieran, fuera del recurso de amparo.

México, Junio veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.—(firmado).—*Herrera Campos.*

### *Sentencia del C. Juez 1º de Distrito.*

México, Junio veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo seguido ante este Juzgado primero de Distrito, por el C. Francisco A. Mendivil, en representacion de sus coherederos, en los bienes que quedaron por fallecimiento de D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia de los Ríos de Mendivil, y vistas las diligencias practicadas, de la cuales resulta: que el quejoso asegura que han sido violadas en su persona y la de sus coherederos, las garantías que otorga el art. 27 de la Constitución general de la República, por las providencias dictadas en el Ministerio de hacienda, en 1º de Junio y 4 de Julio del año próximo pasado, constantes á fojas seis y nueve; que las providencias se reducen, segun el tenor literal de ellas, á que si los Mendivil tienen derechos de propiedad á la casa que por haber pertenecido á los ex-conventos de Santa Inés y Santa Mónica, fué adjudicada sin oposicion alguna, ocurran á

los tribunales á deducirlos, para que si son declarados buenos, el gobierno determine lo conveniente sobre el capital: que siendo el sentir de las providencias el referido, no se puede decir que el gobierno haya obrado en contra de la prevencion del art. 27 de la Constitucion, pues no manda que se ocupe la propiedad, sino que deduzcan sus derechos ante los tribunales, de la propiedad de la casa número seiscientos cincuenta, ubicada en Veracruz y adjudicada en Mayo de mil ochocientos sesenta; que los Mendivil se quejaron de la adjudicacion hasta el año de mil ochocientos setenta, con lo que se confirma el que no se opusieron á tiempo, y si fueron despojados debieron haber desde luego entablado su accion; que el gobierno no les ha negado la propiedad de la casa adjudicada, sino que ha sostenido una adjudicacion hecha sin oposicion y con arreglo á las leyes, ha escuchado á los quejosos, y como prueba de ello les dice que ocurran á los tribunales á deducir sus derechos; que si el gobierno se negara á escucharlos, siempre tendrian expeditos sus derechos, ya para quejarse del despojo ó ya para entablar el juicio de propiedad, pero no para pedir amparo en contra de las providencias, pues ellas justifican que se deben respetar los derechos de los Mendivil previo el fallo judicial; que debe tenerse presente, que la adjudicacion se hizo en el año de 1860, y hasta despues de mucho tiempo se opusieron á ella, sin tener en cuenta la prevencion de la ley de 4 de Marzo de 1861; y que las razones expuestas por el C. Promotor son de atenderse, para no conceder el amparo. Con arreglo á lo expuesto, á los artículos 101 y 102 de la Constitucion general de la República, y á la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la Justicia federal no ampara al C. Francisco Mendivil y á sus coherederos en contra de las providencias del Ministerio de Hacienda, de fechas de 1º de Junio y 4 de Julio del año próximo pasado, á los que se les impone el minimum, de la multa que establece la ley ci-

tada. Hágase sabor, sáquense copias de esta sentencia para que se publiquen en el *Diario Oficial y Semanario Judicial*, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia. Así lo mandó y firmó el C. Juez 1º de Distrito Lic. José Isaac Sancha: Doy fé—*J. I. Sancha.*—*Joaquín Sánchez González*, secretario,

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Julio doce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad por el C. Francisco de A. Mendivil, por sí y en nombre de sus coherederos contra los actos del C. Ministro de Hacienda; quien con fechas del 1º de Junio y 4 de Julio del año próximo pasado dispuso, que el quejoso ocurra á los Tribunales á deducir sus derechos á la propiedad de la casa N. 650 de la calle de Vicario, en la ciudad de Veracruz, redimida en el año de 1860, por D. José Lolong, y Considerando: que esas disposiciones no atacan la garantía de la propiedad individual á que se refiere el artículo 27 de la Constitucion federal; se decreta: que se cofirma la sentencia pronunciada el 29 de Junio próximo pasado, por el Juzgado 1º de Distrito de esta ciudad; solamente en la parte que declara que la Justicia federal no ampara al C. Francisco Mendivil y á sus coherederos en contra de las providencias del Ministerio de Hacienda de fechas de 1º de Junio y de 4 de Julio del año próximo pasado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—J. García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Julio quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## COMISO.

*Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan sobre treinta y un fardos y dos cajas mercancías que se denunciaron como abandonadas en el rancho de San Andrés.*

### SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

En la ciudad de Mérida, á los diez y nueve dias del mes de Mayo de mil ochocientos setenta y un años, el C. Juez de Distrito de este Estado, Lic. Yanuario Manzanilla, hallándose en audiencia pública, el infrascrito dió cuenta con estos autos de juicio verbal de comiso seguido por la aprehension de unos bultos de mercancías hallados en el arenal alto del rancho yermo San Andrés á Sotavento del puerto denominado el Progreso; y habiendo visto las diligencias practicadas para las averiguaciones del hecho referido; el edicto publicado convocando á juicio verbal de comiso á los que se consideren parte en él; el acta del referido juicio, con lo alegado en dicha acta, y la citacion para sentencia. Considerando primero: que los bultos de mercancías fueron hallados en el rancho yermo San Andrés, situado en las playas del puerto del Progreso. Segundo: que aunque se

llamó por edictos á los que se considerasen parte en el juicio de comiso, nadie se presentó. Tercero: que tanto por las circunstancias expresadas como porque se presume que dichos efectos vinieron á bordo de la polacra española "Dos Magdalenas" segun se infiere de los dos telégramas dirigidos á este Juzgado por la Aduana Marítima de Sisal, manifestándose en el primero, que se presume que dicho buque hizo el contrabando, presuncion que queda confirmada con la fuga de la polacra á que se contrae el segundo, de cuya fuga se están siguiendo ya las diligencias respectivas por cuerda separada. Cuarto: que tambien se deben seguir diligencias por cuerda separada por la presuncion que hay de que se haya robado parte de los efectos; presuncion que nace de haberse encontrado un bulto cerrado y otro vacío, así como de haberse recojido un pañuelo por el Juez auxiliar del rancho Chelom. Quinto: que por lo expuesto, el hecho está comprendido en la fraccion primera art. 23 de la ordenanza general de Aduanas, pues fué introduccion clandestina de mercancías extrangeras en un punto de la costa no habilitado para el comercio, siendo evidente que el caso es de contrabando.

Por estos fundamentos legales, de conformidad con la fraccion 1ª art. 26 de la referida ordenanza y del parecer fiscal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes de la Union, decreta: Primero: Se impone la pena de confiscacion á los efectos que contienen los mencionados bultos. Segundo: Sáquese testimonio de la sentencia, para remitir al C. Administrador de la Aduana Marítima de Sisal, quien hará la distribucion legal del comiso luego que se rematen los efectos, previos los pregones de la ley y anunciándose por la prensa el día y lugar del remate. Tercero: Sáquese testimonio del juicio para remitir á la Superioridad dentro de cinco dias útiles, si no se apela la sentencia, y cuarto: Sáquese otro testimonio del fallo para averiguar por cuerda separada el robo de los efectos que se pre-